

PLAZA PUBLICA

- Lo que es bueno para Baker...
- Un alivio oneroso

■ Miguel Angel Granados Chapa ■

Nuestra economía se asemeja a los desahuciados que son atendidos en hospitales de pobres: deben pagar con sangre, adelgazada por su anemia, las transfusiones que reciben y que les permiten seguir donando el plasma que otros familiares reclaman.

Si bien es innegable que el aplazamiento en el pago del principal, y sobre todo la obtención de los muy regateados recursos frescos que requiere un país tan dependiente de las importaciones como el nuestro, constituye un alivio, también es cierto que se trata de una medicina muy cara.

El acuerdo de la banca acreedora y el gobierno mexicano, construido trabajosamente, según las pautas del Fondo Monetario Internacional, tiene un beneficiario principal: el gobierno de Washington. No lo decimos nosotros, a quienes podría asaltar una perturbación antiyanqui. Eso se lee muy claramente en el análisis que remitió, el primero de octubre, horas después de concertarse el acuerdo, el servicio estadounidense de información financiera AP-Dow Jones: "El acuerdo significa una victoria para Estados Unidos en su lucha por contener la crisis del endeudamiento del Tercer Mundo".

En igual sentido, sin poder ocultar su alborozo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, James Baker definió, en su discurso ante la asamblea conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el propio miércoles primero: "México es un ejemplo concreto de que dentro de la nueva estrategia para atender el problema de la deuda, la cooperación multilateral es el camino a seguir".

En esta cooperación, sin embargo, unos cooperan más que otros. Y la carga principal sigue recayendo sobre los deudores. Es decir, sobre México, en el caso particular del acuerdo concertado la semana pasada en medio de fuertes presiones nacidas de la premura con que se desarrolló la última fase de las negociaciones. El Fondo había fijado un plazo perentorio que vencía el 29 de septiembre, víspera del inicio de las asambleas conjuntas, plazo que no pudo ser cumplido, por los obstáculos impuestos por la banca comercial acreedora, y que finalmente se convirtieron en condiciones que debió acatar el gobierno, a fin de acordar lo ya sabido el martes 30, cuando ya estaba iniciada la reunión del Fondo y del Banco.

Según los observadores, el acuerdo no permitió al gobierno de México alcanzar los objetivos que se había fijado, y que consistían en reducir la carga por concepto de intereses y practicar la corresponsabilidad de los acreedores.

En vez de eso, durante los siguientes siete años, en que no cubriremos ni un centavo de capital, pagaremos sólo réditos: difícilmente puede haber mejor negocio para los banqueros, interesados más que nadie en que jamás se eliminen los créditos principales, mientras éstos sigan generando intereses que sean puntualmente entregados por los destinatarios de los créditos.

El lapso acordado para comenzar a cubrir de nuevo el principal obliga a plantearse la interrogación de si el acuerdo financiero no incluyó también la fijación de condiciones políticas. En efecto, el próximo Presidente de la República será responsable de cumplir, terminado el plazo de gracia, los acuerdos generados ahora.

No es descabellado imaginar que los banqueros hayan solicitado garantías de que ese Presidente sea capaz de observar los acuerdos pactados. No queremos decir que hayan incurrido en la grosera idea de solicitar nombres, pero sí acaso, el perfil ideológico que les dé tranquilidad. De ser así, como no es exagerado conjeturar, estaríamos en presencia del futurismo más eficaz que nadie haya practicado nunca; y del grave riesgo de que una principalísima decisión de política mexicana se anuncie frente a extranjeros antes que ante mexicanos.